

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 12º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6948-2020
CARATULADO : VILLALÓN/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, veintiséis de Abril de dos mil veintitrés

VISTOS:

Que con fecha 28 de abril de 2020, comparece doña PATRICIA SAINT-JEAN GERBIER, RUN: 5.578.287-3, banquetera, con domicilio en La Ramada N°2635, Villa Quinchamalí, comuna de La Florida; doña PATRICIA DE LOS ÁNGELES VILLALÓN SAINT-JEAN, RUN: 12.487.701-6, abogada, con domicilio en Antonio Varas N°2200, dpto. 910, comuna de Ñuñoa; doña MARÍA VIRGINIA VILLALÓN SAINT-JEAN, RUN: 13.257.946-6, dueña de casa, con domicilio en Pintora Magdalena Mira N°7801, comuna de Las Condes; y doña GABRIELA ALEJANDRA VILLALÓN SAINT-JEAN, RUN: 12.880.464-1, profesora, con domicilio en Camino de las Lavándulas N°7916, comuna de Peñalolén, quienes debidamente representadas por el abogado don NELSON GUILLERMO CAUCOTO PEREIRA interponen demanda de indemnización de perjuicios, en contra del FISCO DE CHILE, representado por el Presidente del CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO don JUAN ANTONIO PERIBONIO PODUJE, abogado, ambos con domicilio hoy en calle Agustinas N°1225, piso 4, Santiago.

Refieren que en el contexto del régimen de facto que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, bajo cuyo imperio se habría implementado una política sistemática de detención, tortura y desaparición de ciudadanos opositores;

PATRICIA SAINT-JEAN GERBIER fue detenida, por funcionarios de la CNI, el 8 de septiembre de 1986, en su domicilio. Tras su detención fue trasladada al cuartel Borgoño, lugar en el que se le interrogó y fue sometida a malos tratos psicológicos y en su domicilio, quedaron sus hijos (13, 11 y 9 años), a cargo de dos agentes de la CNI, quienes permanecieron en espera de que llegara su sobrino, José Rodrigo Saa Gerbier, buscado por su participación en el atentado al Sr. Pinochet.

Argumenta que, conforme al derecho internacional y a la Constitución Política de la República y Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad, lo que



Foja: 1

sería fundamental a la hora de resolver en cuanto a la responsabilidad de reparación que le cabe al Estado de Chile en este caso.

Cita jurisprudencia en la que se ha considerado un estatuto de normas que privilegian y desarrollan los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, debiendo ponderarse el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito de los derechos humanos a la luz de las normas de carácter público e internacionales, y no bajo las normas del derecho privado, tornándose así en imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Finaliza solicitando conforme a los daños psicológicos, por la detención ilegal, para cada una de las demandantes, que se condene al demandado al pago de \$40.000.000 o la suma que el tribunal determine, a título de indemnización por daño moral, más reajustes, intereses y costas, para cada una de las demandantes.

Con fecha 23 de julio de 2020, se practicó la notificación de la demanda y su proveído.

Con fecha 10 de agosto de 2020, el demandado contestó el libelo pretensor, solicitado el rechazo de éste en todas sus partes.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, la que funda en que las demandantes ya han sido suficientemente indemnizados con motivo de los hechos invocados, mediante transferencias directas de dinero (pensión anual establecida por la Ley N° 19.992), asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda) y otras reparaciones de tipo simbólico (construcción de memoriales, del Museo de la Memoria, establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Premio Nacional de los Derechos Humanos).

También opone excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo a su juicio rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por los demandantes y la demandante y, aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, el 23 de julio de 2020, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior, para el evento de estimarse no aplicable la norma citada, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, por cuanto desde la fecha en que pudo ser exigible el derecho a indemnización y



Foja: 1

la fecha de notificación de la demanda, también habría transcurrido el plazo antes mencionado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.

Finalmente y en subsidio de las defensas anteriores, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia. Además, sostiene que cualquier indemnización que pudiera concederse en virtud de la sentencia que dirima esta controversia, debiera considerar los montos ya recibidos por las demandantes, por parte del Estado, pues, de lo contrario, aquellas, recibirían un doble pago.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que solicita la parte demandante no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente litis.

Con fecha 19 de agosto de 2020, la parte demandante evacuó el trámite de réplica.

Reiterando los argumentos vertidos en la demanda y, solicitando el rechazo de cada una de las excepciones opuestas, defensa y alegaciones.

En primer lugar, señala que todos los actos de reparación llevados a cabo por el Estado luego de 1990 solo han venido en compensar parcialmente los daños sufridos por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, otorgando pensiones meramente



Foja: 1

asistenciales o de sobrevivencia, lo en ningún caso pueden significar una indemnización de perjuicios para las víctimas, por lo cual no obsta en modo alguno el ejercicio del derecho a petición mediante la demanda incoada en autos, apoyada, de la jurisprudencia de los más altos Tribunales de Justicia.

Además, profundiza y señala a modo ejemplar que en diversas causas de connotación, tales como “Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile”, en el caso del abogado Sr. Julio Cabezas, el caso de la familia de Tucapel Jiménez, el de la familia del ex Canciller Orlando Letelier o el de la señora Otilia Vargas (madre de 5 desaparecidos), incluso el acuerdo arribado con la familia del General Carlos Prats, vienen a confirmar que es perfectamente compatible una indemnización en conjunto con la reparación de los Informes Rettig y Valech.

En segundo lugar, descarta absolutamente que las únicas reglas que existan para regular la responsabilidad del Estado sean las contenidas en el Código Civil, por cuanto ello significaría negar validez y eficacia a otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional, reconociéndolo así la Corte Suprema en diversos fallos. Ello en atención a que el hecho cuya reparación se demanda es un delito de lesa humanidad y ahonda citando profusa jurisprudencia. Finalmente arguye que el sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

Por último, en cuanto al monto demandado por cada una de las víctimas, sostiene que no hay dinero que supla el dolor experimentado por éstas. Por último, señala que en definitiva será el Tribunal quien, fije el monto de la indemnización.

Con fecha 27 de agosto de 2020, el demandado evacuó la duplica, refiriéndose a la excepción de reparación integral, discute asegurando, que las pensiones que otorga el Estado, no tienen carácter de asistenciales, toda vez que el Estado de Chile adoptó una política integral de reparación tanto en dinero, beneficios de salud, construcción de memoriales, etc. y por eso es integral y no sólo una denominación, como alega en su réplica por lo que estima reparado el daño moral. Asimismo, citando un fallo de la Excm. Corte Suprema, señala que sería incompatible perseguir la indemnización por daño moral que se pretende con los beneficios otorgados por las leyes reparatorias, reiterando los argumentos ya vertidos en su contestación, amparándose en jurisprudencia, en apoyo a la tesis fiscal de prescripción de las acciones civiles.

Con fecha 31 de diciembre de 2020, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta hubo de recaer.

Con fecha 11 de abril de 2023, se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TPTXXEXMTNY

Foja: 1

Primero: Que, doña PATRICIA SAINT-JEAN GERBIER, PATRICIA DE LOS ÁNGELES VILLALÓN SAINT-JEAN, MARÍA VIRGINIA VILLALÓN SAINT-JEAN y, GABRIELA ALEJANDRA VILLALÓN SAINT-JEAN, demandaron de indemnización de perjuicios al FISCO DE CHILE, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don JUAN ANTONIO PERIBONIO PODUJE, a objeto de que el ente estatal sea condenado a pagar en favor de cada uno de las demandantes la suma de \$40.000.000, o la suma que el tribunal determine, más reajustes, intereses y costas, a título de indemnización por el daño moral, que se les infirió con ocasión de la privación de libertad y torturas de las que fueron víctimas a manos de agentes del Estado.

Segundo: Que, legalmente emplazado, el demandado, opuso la excepción de reparación satisfactiva, por ya haber recibido las demandantes diversos beneficios asistenciales por parte del Estado. Asimismo, opuso la excepción de prescripción extintiva conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Por último, alega lo desproporcionado que resulta la suma pretendida por las demandantes, la improcedencia de que se le indemnice nuevamente a raíz de los mismos hechos y la impertinencia de aplicar intereses y reajustes sobre una eventual indemnización que se declare en la sentencia que dirima la controversia.

Tercero: Que, en el trámite de la réplica las demandantes buscaron refutar las defensas opuestas por el demandado, manifestando que no ha existido una reparación íntegra por parte del Estado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que la prescripción civil no opera tratándose de atentados de lesa humanidad, y que es el tribunal quien en definitiva debe fijar el monto de la indemnización que corresponde.

Cuarto: Que, en el trámite de la réplica el demandado profundizó las argumentaciones ya vertidas en la contestación.

Quinto: Que, para la prueba de sus asertos, la parte demandante acompañó, legalmente y sin objeción de contrario, los siguientes documentos:

1. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por PATRICIA SAINT-JEAN GERBIER,
2. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por doña MARÍA VIRGINIA VILLALÓN SAINT-JEAN.
3. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por GABRIELA ALEJANDRA VILLALÓN SAINT-JEAN.
4. Copia de la Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech, por doña PATRICIA DE LOS ÁNGELES VILLALÓN SAINT-JEAN
5. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 31 de julio de 2019, en el que se indica que doña PATRICIA SAINT-JEAN GERBIER, cédula de identidad N°5.578.287-3, se encuentra calificada como



Foja: 1

- víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Valech I y copia de nómina en la que figura con el número 22005.
6. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 31 de julio de 2019, en el que se indica que doña PATRICIA DE LOS ÁNGELES VILLALÓN SAINT-JEAN cédula de identidad N°12.487.701-6, se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Valech II y copia de nómina en la que figura con el número 9527.
 7. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 31 de julio de 2019, en el que se indica que doña GABRIELA ALEJANDRA VILLALÓN SAINT-JEAN, cédula de identidad N°12.880.464-1, se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Valech II y copia de nómina en la que figura con el número 9525.
 8. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 31 de julio de 2019, en el que se indica que doña MARÍA VIRGINIA VILLALÓN SAINT-JEAN, cédula de identidad N°13.257.946-6, se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Valech II y copia de nómina en la que figura con el número 9526.
 9. Certificado de nacimiento de doña PATRICIA SAINT-JEAN GERBIER
 10. Certificado de nacimiento de doña PATRICIA DE LOS ANGELES VILLALÓN SAINT-JEAN
 11. Certificado de nacimiento de doña MARÍA VIRGINIA VILLALÓN SAINT-JEAN
 12. Certificado de nacimiento de doña GABRIELA ALEJANDRA VILLALÓN SAINT-JEAN
 13. Extracto informe Vicaria relativo a detenciones.
 14. Extractos informe Vicaria relativo a detenciones.
 15. Copia de la Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 1092-15, de fecha 14 de septiembre del año 2015. Que por primera vez reconoce la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, como colofones de un inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia, otorgando la correspondiente indemnización de perjuicios por las actividades y hechos constitutivos de las violaciones de los Derechos Humanos



Foja: 1

en Magallanes e Isla Dawson, y de los campos de concentración y centros de detenciones y torturas en Magallanes.

16. Copia de la Sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018.

17. Copia de la Sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018, la que declara que el Estado de Chile es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, por cuanto se aplicó, en el pasado, una figura procesal formal, como es la prescripción, en juicios de reparación por el daño moral ocasionado por violaciones masivas a los derechos humanos.

Sexto: Que, la parte demandante también allegó al proceso la declaración de testigos, que a continuación se reseñan sucintamente:

- Erika Scarlett Holtheuer del Pino.

Quien legalmente juramentada y al tenor de los puntos de prueba declara que hace 20 años que conoce a Virginia Villalón y desde entonces conoce la historia familiar, esto es que vivían con un familiar que fue detenido por agentes del estado, acusado de algún acto político. Los agentes fueron agresivos al irrumpir en el hogar familiar, lo que le causado traumas. Además, relata por los dichos de la demandante, que notaban que estaban siendo vigiladas y, que en una ocasión se la llevaron detenida junto a su madre y dejaron retenidas a sus hermanas en la casa.

Asimismo declara que a propósito de su formación en la terapia floral, a los años trató a su amiga y que ésta tenía ansiedad por separación, lo que afectó su vida social y matrimonial.

- Catalina Ana Verdugo Domic

Quien legalmente juramentada y al tenor de los puntos de prueba declara que conoce a Patricia Villalón desde el año 1998, eran compañeros en la facultad de derecho, dice que han sido afectadas como familia desde que sufrieron la represión de funcionarios de la PDI o CNI, durante el régimen dictatorial y que esto ha afectado manteniéndolas en permanente tratamiento psicológico y han desarrollado una relación aprehensiva con la madre.

- Gloria María Aroca Cáceres

Quien legalmente juramentada y al tenor de los puntos de prueba declara que era compañera de colegio con Gabriela Villalón y que conoce a toda la familia, sin aportar antecedentes relevantes a la causa.



Foja: 1

Séptimo: Que, el demandado, en apoyo de sus asertos, acompañó un oficio de fecha 12 de enero de 2023, remitido por el Instituto de Previsión Social.

Octavo: Que, se tiene presente que sin perjuicio de no haber sido controvertido, con el mérito de los documentos que constan en el considerando Quinto, los numerales 1 al 8, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido las demandantes, víctimas de represión, a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

Noveno: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N° 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

Décimo: Que, los vejámenes de los que fueron víctimas las demandantes de autos han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática



Foja: 1

(artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

Asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

Undécimo: Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley N° 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley N° 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$ 1.353.798 y \$1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley N° 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

Duodécimo: Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas "*leyes de reparación*", si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el



Foja: 1

daño causado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciias permitidas y equiparidad de beneficios que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

De acuerdo con lo razonado, procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

Décimo Tercero: Que, en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Décimo Cuarto: Que, la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

Décimo Quinto: Que, la prescripción extintiva de la acción deducida no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.



Foja: 1

Décimo Sexto: Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

Décimo Séptimo: Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

Décimo Octavo: Que, en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que se ha acreditado suficientemente que las demandantes fueron víctimas de represión, lo que ha repercutido en sus vidas, a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en aquellos y aquella secuelas como las descritas, suponiendo todo esto una aflicción experimentada por cada una de las demandantes, difícilmente superable por el mero transcurso del tiempo, y que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

Décimo Noveno: Que, el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandado, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos. De esta manera, los hechos en que incurrieron agentes del Estado de Chile produjeron el daño moral padecido por las demandantes, encontrándose aquel, en definitiva, obligado a indemnizarlas.

Vigésimo: Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente que el demandado, ha hecho presente que las demandantes, al estar reconocidos como víctimas



Foja: 1

de prisión políticas y torturas, han sido beneficiarias de pensiones pecuniarias por parte del Estado, en virtud de las denominadas "*leyes de reparación*"

Debido a ello, que por lo demás, es un hecho público y notorio y teniendo presente lo ya consignado en el considerando décimo cuarto, la suma que con motivo de esta sentencia se concederá a cada una de las demandantes, esto es, PATRICIA SAINT-JEAN GERBIER, PATRICIA DE LOS ÁNGELES VILLALÓN SAINT-JEAN, MARÍA VIRGINIA VILLALÓN SAINT-JEAN, GABRIELA ALEJANDRA VILLALÓN SAINT-JEAN, a título de daño moral se fijará en la suma de \$10.000.000.

Vigésimo Primero: Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

Vigésimo Segundo: Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, es, también, cierto que la decisión contenida en la misma sentencia se propone dirimir el conflicto en forma definitiva e impone una condena pura y simple a pagar esta suma de dinero con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en su contra. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento espontáneo por el deudor a contar del instante en que la sentencia surte sus efectos, es decir, desde su notificación legal y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital adeudado los intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce al absurdo de que, en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarán sin resarcir.

Por estos motivos, se accederá a la condena del pago <de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

Vigésimo Tercero: Que, no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de este.



Foja: 1

POR ESTAS CONSIDERACIONES, Y VISTO además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; artículos 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.123; artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.992; artículo 1 de la Ley N° 20.874; artículos 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y artículos 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

- I. Que, se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.
- II. Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, sólo en cuanto se condena al demandado FISCO DE CHILE al pago de \$10.000.000 en favor de cada una de las demandantes, por concepto de daño moral, conforme se establece en el considerando vigésimo.
- III. Que, la suma decretada precedentemente deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a contar de la época de notificación de la presente sentencia a la parte demandada y hasta la época de pago efectivo.
- IV. Que cada parte pagará sus costas.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CONSÚLTESE SI NO SE APELARE

DICTADA POR DOÑA MARÍA SOFÍA GUTIÉRREZ BERMEDO, JUEZA TITULAR//

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Abril de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TPTXXEXMTNY

